Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México; de fecha veinticuatro (24) de enero de dos mil veinticuatro.

**VISTO** el expediente electrónico formado con motivo del recurso de revisión **06708/INFOEM/IP/RR/2022**, interpuesto por **XXX XXX XXX**, en lo sucesivo el **RECURRENTE**, en contra de la respuesta de la **Secretaría de Seguridad**, en adelante el **SUJETO OBLIGADO**,se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:

# **A N T E C E D E N T E S**

1. El veintinueve (29) de marzo de dos mil veintidós, el entonces **SOLICITANTE** presentóa través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), la solicitud de información pública registrada con el número **00107/SSEM/IP/2022,** en la que requirió lo siguiente:

 *“solicitud de geolocalización de patrulla ME568A3 de la policía estatal”* (Sic).

1. Se hace constar que la particular señaló como modalidad de entrega de la información: ***A través del SAIMEX***.
2. Así mismo, adjunto a su solicitud de información, el entonces **SOLICITANTE** presentó el archivo electrónico titulado ***“solicitud de información.txt”***, mediante el cual, el particular ahonda en su solicitud de información conforme al siguiente texto:

*“Estado de México Ecatepec de Morelos*

*Las Américas*

*Los delegados de la sección lagos y montes fueron a solicitar apoyo de vigilancia al jefe de servicios del tercer agrupamiento de la policía estatal en el mes de enero 2022 y fue muy tajante diciendo que él tenía muchos operativos y además realizaba durante todo el día supervisiones a los servicios de sus elementos, por lo que nos dijo que hicieramos un escrito dirigido a toluca para que allá giraran un oficio para atender nuestras demandas de seguridad en las estaciones del mexibus "primero de mayo" y "jardines de Morelos" pero pasa lo siguiente:*

*Todos los días que pasamos por ese sector la unidad ME568A3 y siempre vemos a este comandante a diferentes horas del día, de igual manera nuestras familias que pasan por ahí nos comentan que siempres está en la base la unidad y el comandante.*

*Ahora conocemos el nombre de este comandante de nombre Juan Carlos Patiño Rodríguez y esta es su patrulla ME568A3 Lo que queremos es saber en donde se encontraba en la semana del domingo 30 enero al 07 de febrero de 2022, deseamos que se proporcione los datos que se guardan en la base datos del GPS de la patrulla.*

*Ya que en esas fechas es cuando se disparó el robo de celulares y fué cuando se solicitó el apoyo y se nos negó, por lo que una vez tengamos dicha información procederemos a iniciar nuestra acta por omisión. Gracias”* (Sic)

1. El veintiséis (26) de abril de dos mil veintidós, el **SUJETO OBLIGADO** dio respuesta a la solicitud de información en los siguientes términos:

 *“SE ANEXA RESPUESTA EN FORMATO PDF, EN CASO DE PRESENTAR PROBLEMAS CON LA RECEPCIÓN DE LA MISMA, LE PEDIMOS SE COMUNIQUE A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, AL TELÉFONO 722 2 79 62 00 EXT. 4158, DE LUNES A VIERNES, EN UN HORARIO DE 9:00 A 18:00 HRS.”* (Sic.)

1. Adjunto a su acuse de respuesta, el **SUJETO OBLIGADO** presentó el siguiente archivo electrónico:
	1. ***“Solicitud 107.pdf”***: Documento de dos fojas consistente en un oficio de veinticinco (25) de abril, sin folio único de identificación, emitido por la Titular de la Unidad de Transparencia, dirigido al entonces **SOLICITANTE**, por el que manifiesta que, mediante el oficio número 20601003L/DGSPYT/E-916/2022, el Servidor Público Habilitado de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, informó que después de una búsqueda razonable y minuciosa en los archivos correspondientes, no se localizó información relacionada con la patrulla con la nomenclatura referida en la solicitud primigenia.
2. Derivado de la respuesta emitida por el **SUJETO OBLIGADO**, el veintiséis (26) de abril de dos mil veintidós, el particular interpuso el recurso de revisión **06708/INFOEM/IP/RR/2022**; impugnación en la que refirió lo siguiente:
* **Acto impugnado:** “*FALTA DE CONFIABILIDAD EN LA PRUEBA OFRECIDA”* (Sic)
* **Razones o motivos de inconformidad:** “*La información que me dieron referente a mi solicitud no es fehaciente ya que la patrulla sigue siendo usada por este policía y su novia , anexo las fotos de la unidad ME-568A-3 esa unidad no es clonada ni nada por el estilo. Haber si en la búsqueda "razonable y minuciosa" hallan que sí existe. Seguimos a la espera de la infoemación solicitada originalmente. gracias”* (Sic)
1. Adjunto al recurso de revisión antes enunciado, el ahora **RECURRENTE** presentó los siguientes archivos electrónicos:
	1. ***“Solicitud 107.pdf”***: Documento de dos fojas consistente en el oficio de veinticinco (25) de abril, sin folio único de identificación, emitido por la Titular de la Unidad de Transparencia, entregado en respuesta a la solicitud de información **00107/SSEM/IP/2022**.
	2. ***“ME568A3.png”***: Archivo de imagen consistente en la fotografía tomada a un inmueble donde aparece aparcada una patrulla de la Policía Estatal con la nomenclatura señalada por el particular.
	3. ***“ME568A3 (2).png”***: Archivo de imagen consistente en otra fotografía tomada más de cerca al mismo inmueble donde aparece aparcada una patrulla de la Policía Estatal con la nomenclatura señalada por el particular
2. Se registró el recurso de revisión bajo el número de expediente **06708/INFOEM/IP/RR/2022**; asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios se turnó a la **Comisionada María del Rosario Mejía Ayala**, para su análisis.
3. La Comisionada Ponente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185, fracción II, de la Ley de la materia, a través del acuerdo de admisión de **dos (02) de mayo de dos mil veintidós**, puso a disposición de las partes el expediente electrónico vía SAIMEX, a efecto de que en un plazo máximo de siete días manifestaran lo que a derecho convinieran, ofrecieran pruebas y alegatos según corresponda a los casos concretos, de esta forma para que el **SUJETO OBLIGADO** presentara el Informe Justificado procedente.
4. El once (11) de mayo de dos mil veintidós, el **SUJETO OBLIGADO** presentó su informe justificado a través de los siguientes archivos electrónicos:
	1. ***“INFORME JUSTIFICADO RR-06708.pdf”***: Documento de cinco fojas consistente en el oficio número 20600007000000S/UIPPE/0669/2022, de seis (06) de mayo de dos mil veintidós, emitido por la Titular de la Unidad de Transparencia, dirigido a la Comisionada Ponente de este Instituto, por el que **revoca** la respuesta inicialmente otorgada a la solicitud de información **00107/SSEM/IP/2022** y entrega una relación de las actividades realizadas con la patrulla número MR568A3, del treinta (30) de enero al siete (07) de febrero de dos mil veintidós; así mismo, informa sobre la clasificación por reserva de la información relativa a los datos de almacenamiento del GPS instalado en el vehículo de mérito.
	2. ***“ACTA DECIMA EXTRA .pdf”***: Documento de 10 fojas consistente en el Acta de la Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, celebrada el seis (06) de mayo de dos mil veintidós, en cuyo punto 7 del Orden del Día, se analizó y aprobó el proyecto de clasificación de los datos de almacenamiento del GPS instalado en el vehículo relacionado con la solicitud de información **00107/SSEMIP/2022**.
	3. ***“ANEXO CINCO.pdf”***: Documento de siete fojas consistente en el Acuerdo número SS/CT/EXT/X/005/2022, del Comité de Transparencia, de seis (06) de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual, se determinó la reserva de la información relacionada con los datos de almacenamiento del GPS instalado en el vehículo relacionado con la solicitud de información **00107/SSEMIP/2022**.
5. El doce (12) de diciembre de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 181, tercer párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios se notificó que el plazo de 30 días para resolver el recurso de revisión sería ampliado por un periodo de 15 días hábiles adicionales.
6. Este Organismo Garante no pasa por alto explicar, que la dilación en la resolución del presente asunto encuentra justificación en el alto número de recursos de revisión recibidos dentro del primer semestre del dos mil veintidós; que, en comparación con los recibidos el año pasado, y en el mismo periodo, se ha incrementado aproximadamente un 400% el número de medios de impugnación que deben resolverse por este Instituto. Circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.
7. Por ello, es menester precisar que si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la Ley de la materia, dicha dilación es de carácter excepcional y se encuentra justificada en los elementos para medir la razonabilidad del plazo de resolución de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.
8. Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.
9. En ese sentido, el Legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.
10. Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad de dicha dilación atendiendo a los siguientes criterios:
	1. **Complejidad del Asunto:** La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.
	2. **Actividad Procesal del interesado:** Acciones u omisiones del interesado.
	3. **Conducta de la Autoridad:** Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.
	4. **La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso:** Violación a sus derechos humanos.
11. De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.
12. Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro *“TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”[[1]](#footnote-2)*, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.
13. Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.
14. Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

***PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.*** *“A partir de la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros ordenamientos internacionales, el Estado Mexicano cuenta con un catálogo de derechos y garantías que vinculan normativamente, y permite salvar situaciones que diversas leyes plantean, partiendo de la dimensión objetiva que esos derechos ejercen sobre todo el orden jurídico, tomando en cuenta que el plazo previsto en las leyes para resolver un asunto pudiera no corresponder a la realidad, siendo factible acudir, en tal supuesto, a los ordenamientos internacionales a fin de establecer el contenido del concepto de "plazo razonable" conforme a las particularidades del caso; más aún, un criterio de razonabilidad y justificación de eventuales demoras, aplicando directamente los artículos 8 y 25 de la aludida convención, permiten configurar un proceso justo o una tutela judicial efectiva. Así, el concepto de "plazo razonable" es aplicable a la solución jurisdiccional de una controversia, pero también a procedimientos análogos, lo que a su vez implica que haya razonabilidad en el trámite y en la conclusión de las diversas etapas del procedimiento que llevarán al dictado de sentencias definitivas o proveídos, así como de diligencias en la ejecución de los fallos judiciales, lo que se relaciona con el comportamiento de las autoridades competentes a fin de justificar el exceso de la duración de las causas, que generalmente aducen sobrecarga de trabajo, reflexionando que, una de las atenuantes para tal cuestión, consiste en que dichas autoridades demuestren haber adoptado las medidas pertinentes a fin de aminorar sus efectos; sin embargo, cuando esa sobrecarga ha dejado de tener el carácter de excepcional y adquiere el de estructural, entonces las dilaciones en el procedimiento carecen de justificación alguna, aspecto sobre el cual la Corte Interamericana ha sostenido que el exceso de trabajo no puede justificar la inobservancia del plazo razonable, que no es una ecuación racional entre volumen de litigios y número de tribunales, sino una referencia individual para el caso concreto, por lo que tales cuestiones, si bien se reconocen, ello no implica que deban gravitar sobre los derechos del gobernado, razonamientos que son extensivos no sólo a las autoridades jurisdiccionales, sino también a todas aquellas que tienen injerencia en trámites análogos.”[[2]](#footnote-3)*

***PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.*** *“En relación con el concepto de demora o dilación injustificada en la resolución de los asuntos, el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, coincidente en lo sustancial con el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, establece que los tribunales deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable, como uno de los elementos del debido proceso; aspecto sobre el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando lo expuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha establecido cuatro elementos o parámetros para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y, d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Además de los elementos descritos, el último de los tribunales internacionales mencionados también ha empleado para determinar la razonabilidad del plazo, el conjunto de actos relativos a su trámite, lo que ha denominado como el "análisis global del procedimiento", y consiste en analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para determinar si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. Por tanto, para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos, debe atenderse al caso particular y ponderar los elementos descritos, conforme a criterios de normalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales contenidas tanto en los aludidos artículos como en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el concepto de "plazo razonable" debe concebirse como uno de los derechos mínimos de los justiciables y, correlativamente, como uno de los deberes más intensos del juzgador, y no se vincula a una cuestión meramente cuantitativa, sino fundamentalmente cualitativa, de modo que el método para determinar el cumplimiento o no por parte del Estado del deber de resolver el conflicto en su jurisdicción en un tiempo razonable, se traduce en un examen de sentido común y sensata apreciación en cada caso concreto.”[[3]](#footnote-4)*

1. Por ello, este Organismo Garante, comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto resulta de carácter excepcional.
2. El dieciocho (18) de enero de dos mil veinticuatro, los archivos electrónicos presentados por el **SUJETO OBLIGADO,** en vía de Informe Justificado, se pusieron a la vista del **RECURRENTE**, concediéndole un plazo de tres (03) días para que manifestara lo que a su derecho conviniera, de conformidad con el artículo 185, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; no obstante, se hace constar que el particular no ejerció su derecho de réplica sobre los nuevos contenidos.
3. Finalmente, el veinticuatro (24) de enero de dos mil veinticuatro, la Comisionada Ponente decretó el cierre del periodo de instrucción, por lo que ordenó turnar el expediente para su resolución, misma que ahora se pronuncia; y ------------------------

# **C O N S I D E R A N D O**

## **PRIMERO. De la competencia**

1. Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver del presente recurso de conformidad con el artículo: 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 1, 2 fracción II, 13, 29, 36 fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y 7, 9 fracciones I y XXIV, y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios**.**

## **SEGUNDO. De la oportunidad y procedencia.**

1. El medio de impugnación fue presentado a través del SAIMEX**,** en el formato previamente aprobado para tal efecto y dentro del plazo legal de quince días hábiles otorgados; para el caso en particular es de señalar que si el **SUJETO OBLIGADO** entregó respuesta el veintiséis (26) de abril de dos mil veintidós, el plazo para interponer el recurso de revisión trascurrió del veintisiete (27) de abril al dieciocho (18) de mayo de dos mil veintidós; sin contemplar en el cómputo los sábados, domingos y días inhábiles, en términos del artículo 3, fracción X, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
2. De las constancias que obran dentro del expediente digital, formado en el SAIMEX, se aprecia que el **RECURRENTE** presentó su inconformidad el veintiséis (26) de abril de dos mil veintidós; esto es, un día hábil antes de que iniciara el plazo precitado, **circunstancia que no es determinante para declarar extemporaneidad**, toda vez que el tiempo concedido es para delimitar el término en que se puede impugnar la respuesta, luego entonces, no impide que se presente antes de iniciado el plazo concedido.
3. Al respecto, cabe señalar que cuando el medio de impugnación se haya interpuesto el mismo día en que se notificó la respuesta impugnada, resulta insuficiente para tener por extemporáneo el recurso de revisión de mérito, toda vez que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios sólo establece que este medio de defensa se ha de promover dentro de los 15 días hábiles siguientes en que se tenga conocimiento de la respuesta impugnada; sin embargo, no prohíbe que el recurso de revisión se presente el mismo día en que ésta fue notificada. Por lo que es de señalar que, en aras de privilegiar el derecho de acceso a la información, se entrará al estudio del presente recurso de revisión sin que la fecha en que se presentó afecte la resolución.
4. Discernimiento de este Órgano Garante que se robustece con la jurisprudencia número 1a./J. 41/2015 (10a.), Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 569, libro 19, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del mes de junio de 2015, cuyo rubro y texto disponen:

***RECURSO DE RECLAMACIÓN. SU INTERPOSICIÓN NO ES EXTEMPORÁNEA SI SE REALIZA ANTES DE QUE INICIE EL PLAZO PARA HACERLO.*** *“Conforme al artículo 104, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el recurso de reclamación podrá interponerse por cualquiera de las partes, por escrito, dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada. Ahora bien, dicho numeral sólo refiere que el aludido medio de defensa no puede hacerse valer después de tres días, por tanto, no impide que el escrito correspondiente se presente antes de iniciado ese término. De ahí que si dicho recurso se interpone antes de que inicie el plazo para hacerlo, su presentación no es extemporánea.”*

1. Esto es así porque, en primer lugar, es necesario que el **RECURRENTE** conozca el acto que le provoca agravio y, a partir de ahí, formular su recurso de revisión señalando tanto el acto impugnado como el motivo de inconformidad. Y si bien la Ley señala que el plazo corre un día después de haber sido notificada la respuesta, en nada se afecta al proceso que el mismo día de ser notificada, el **RECURRENTE** actúe, ya que, por el contrario, lo que demuestra es el interés de éste para ejercer su derecho bajo el principio constitucional de justicia expedita.
2. Por lo que la presentación del recurso de revisión el mismo día del conocimiento de la respuesta, se insiste, no constituye un acto que altere el procedimiento, solo permite su gestión de manera rápida, lo que no afecta ningún principio procesal y es protector del derecho de acceso a la justicia pronta y expedita.
3. Así, la interposición del recurso de revisión antes de que inicie el plazo para su presentación no es determinante para declararlo extemporáneo, siempre y cuando ello ocurra de manera posterior a que se haya notificad la respuesta del **SUJETO OBLIGADO** -tal como ocurre en el presente asunto-.
4. Consecuencia de lo anterior, este Órgano Garante advierte que el escrito contiene las formalidades previstas por el artículo 180, último párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por lo que es procedente que este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, conozca y resuelva el presente recurso.

**TERCERO. Del planteamiento de la *Litis*.**

1. Se requirió el reporte de geolocalización de la patrulla ME568A3, del treinta (30) de enero al siete (07) de febrero de dos mil veintidós. El **SUJETO OBLIGADO** manifestó que no se había localizado información referente a la patrulla señalada.
2. El particular impugnó la respuesta del **SUJETO OBLIGADO**, mediante el recurso de revisión con número indicado al rubro, y en el que señaló por agravios, que la respuesta no era confiable, agregando a su escrito dos fotografías de la patrulla estatal ME568A3. Por su parte, en vía de informe justificado, el **SUJETO OBLIGADO** revocó su respuesta inicial y presentó un reporte de actividades del vehículo, registradas durante el periodo solicitado; así mismo, informó que los datos capturados con el GPS de la unidad habían sido clasificados, como reservados, por un periodo de cinco años.
3. En ese sentido, este Órgano Garante advierte que las razones o motivos de inconformidad manifestados por la **RECURRENTE** sugieren que la respuesta proporcionada por el **SUJETO OBLIGADO** no cumplió con los principios contendidos en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, los cuales señalan que en la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea **congruente**, **confiable** y **sujeta a un claro régimen de excepciones**.
4. Por lo anterior, la *Litis* a resolver en el presente recurso se circunscribe en determinar si la respuesta y posterior informe justificado colman el derecho de acceso a la información ejercido por el **RECURRENTE** o, si por el contrario, se actualizan las causales de procedencia del recurso de revisión establecidas en los artículos 179, fracciones I, II y/o XIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y que se transcriben a continuación:

*“****Artículo 179.*** *El recurso de revisión es un medio de protección que la Ley otorga a los particulares, para hacer valer su derecho de acceso a la información pública, y procederá en contra de las siguientes causas:*

***I.*** *La negativa a la información solicitada;*

***II.*** *La clasificación de la información;*

*(...)*

***XIII.*** *La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta; y*

*(…)”*

## **CUARTO. Estudio y Resolución del asunto.**

**I. Del deber de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho de acceso a la información pública.**

1. Es elemental precisar que este Órgano Garante parte del hecho que el Derecho de Acceso a la Información Pública, es un derecho humano reconocido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19.2; en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13.1; en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo quinto de la Particular del Estado de México, por lo que al respecto el **SUJETO OBLIGADO** debe ser cuidadoso del debido cumplimiento de las obligaciones constitucionales que se le imponen, en consecuencia, a todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, según lo dispone el tercer párrafo del artículo primero de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos** al señalar la obligación de “promover, **respetar**, proteger y **garantizar** los derechos humanos”, entre los cuales se encuentra dicho derecho.
2. Por ende, se deduce que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano convencional y constitucionalmente reconocido; en consecuencia, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, funciones y atribuciones tienen la obligación de respetarlo, protegerlo y garantizarlo.
3. Así las cosas, podemos definir el Derecho de Acceso a la Información Pública como: *La igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información[[4]](#footnote-5)en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal,[[5]](#footnote-6)*que se constituye como una herramienta fundamental para ejercer *el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento a las funciones públicas,[[6]](#footnote-7)* fomentando *la transparencia de las actividades estatales y* promoviendo *la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública,[[7]](#footnote-8)*que permite *saber qué están haciendo los gobiernos por sus pueblos, sin lo cual la verdad languidecería y la participación en el gobierno permanecería fragmentada.*
4. Por otro lado, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, cuyo objeto es establecer principios, bases generales y procedimientos para tutelar y garantizar la transparencia y el derecho humano de acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados; en su artículo 176, establece que **el recurso de revisión es la garantía secundaria mediante la cual se pretende reparar cualquier posible afectación al derecho de acceso a la información pública**, siendo éste el medio a través del cual, este Órgano Garante después de realizar el análisis al procedimiento de acceso a la información, podrá determinar la posible afectación y, de ser el caso, ordenar la reparación a la violación del derecho en cuestión.

**II. De la atención a la solicitud de información.**

1. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en su artículo 150, establece que **el procedimiento de acceso a la información es la garantía primaria del derecho en cuestión y se rige por los principios de** simplicidad, rapidez gratuidad del procedimiento, **auxilio y orientación a los particulares**, así como atención adecuada a las personas con discapacidad y a los hablantes de lengua indígena con el objeto de otorgar la protección más amplia del derecho de las personas.
2. Para atender las solicitudes de información, los Sujetos Obligados contarán con un área denominada **Unidad de Transparencia**[[8]](#footnote-9), la cual será presidida por un Titular, quien fungirá como enlace entre éstos y los solicitantes. Dicha Unidad **será la encargada de tramitar internamente la solicitud de información** y tendrá la alta responsabilidad de verificar, en cada caso, que la misma no sea confidencial o reservada. Asimismo, contará con las facultades internas necesarias para **gestionar la atención a las solicitudes de información** en los términos de la Ley General y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios[[9]](#footnote-10).
3. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, las Unidades de Transparencia tendrán, entre sus atribuciones, las siguientes:
	1. Recibir, tramitar y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información;
	2. Realizar, con efectividad, los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información;
	3. Entregar, en su caso, a los particulares la información solicitada; y
	4. Efectuar las notificaciones a los solicitantes.
4. Otros sujetos del proceso de atención a las solicitudes de información son los **servidores públicos habilitados**, quienes serán designados por el titular del **SUJETO OBLIGADO**, a propuesta del responsable de la Unidad de Transparencia[[10]](#footnote-11) y tendrán, entre sus atribuciones, las siguientes[[11]](#footnote-12):
	1. Localizar la información que le solicite la Unidad de Transparencia; y
	2. Proporcionar la información que obre en los archivos y que le sea solicitada por la Unidad de Transparencia.
5. De tal manera que cada una de las áreas administrativas del **SUJETO OBLIGADO** deberá contar con un servidor público habilitado, quien será, a su vez, el enlace entre la Unidad de Transparencia y el área administrativa, y se encargará de buscar, localizar y proporcionar la información que se requiera a través de las solicitudes de acceso a la información.
6. Ahora bien, de la lectura a la solicitud de información **00107/SSEM/IP/2022**, y como fuera señalado en el *Planteamiento de la Litis* de esta resolución, se advierte que el entonces **SOLICITANTE** requirió acceder a la siguiente información:
	1. **Reporte de geolocalización de la patrulla ME568A3, del treinta (30) de enero al siete (07) de febrero de dos mil veintidós.**
7. En respuesta a la solicitud de información, el **SUJETO OBLIGADO** hizo entrega de un oficio de veinticinco (25) de abril de dos mil veintidós, sin folio único de identificación, emitido por la Titular de la Unidad de Transparencia, cuyo contenido elemental se transcribe a continuación:

*“(…) se requirió la información al Servidor Público Habilitado de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito de este Sujeto Obligado, quien a su vez mediante* [oficio] *número 20601003L/DGSPYT/E-916/2022, informó:*

*Después de una búsqueda razonable y minuciosa en los archivos correspondientes no se localizó información que refiera que la patrulla ME568A3 que señala en su solicitud, pertenezca al parque vehicular de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, motivo por el cual no es posible proporcionarle la información que requiere.”* (Sic)

1. De lo anterior se colige que la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito reportó a la Unidad de Transparencia que, luego de realizar una búsqueda de la información, no se encontraron registros que vincularan a la patrulla ME568A3 con el parque vehicular del **SUJETO OBLIGADO**.
2. Por su parte, el ahora **RECURRENTE** presentó el recurso de revisión con número al rubro citado, en contra de la respuesta del **SUJETO OBLIGADO**, y en el que señaló por agravios:
	1. La falta de confiabilidad en la respuesta.
3. Dentro de este punto, cabe acotar que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en su artículo 12, señala que **los Sujetos Obligados** sólo **proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos** y en el **estado en que ésta se encuentre**.
4. Por otro lado, el diverso 191, en su fracción V, reconoce como una causal de improcedencia del recurso de revisión, que se **impugne la veracidad de la información** proporcionada, tal como sucede en el presente asunto.
5. Sin embargo, y como fuera establecido en el apartado de *Antecedentes* de la presente resolución, el **RECURRENTE** acompañó a su escrito recursal con dos fotografías tomadas a la unidad de la Policía estatal con nomenclatura ME568A3. A continuación se agrega una de las fotografías como referencia:



1. Derivado de lo anterior, el **SUJETO OBLIGADO** realizó una nueva búsqueda de la información, cuyo resultado fue compartido mediante el oficio número 20600007000000S/UIPPE/0669/2022, de seis (06) de mayo de dos mil veintidós, emitido por la Titular de la Unidad de Transparencia, cuyo contenido esencial se comparte a continuación:

*“El servidor público habilitado de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito mediante Oficio No. 20601003L/DGSPYT/E-916/2022 señaló:*

*Respecto de la información consistente en las actividades realizadas con la patrulla número ME568A3 del domingo 30 de enero al 07 de febrero de 2022, se informa:*

**

*Por cuanto hace a: “… se proporcione los datos que se guardan en la base de datos del GPS de la patrulla…” sobre el particular no es viable su entrega en razón de que mediante Oficio No. 20600007000000S/UIPPE/0641/2022 se requirió la información al Servidor Público Habilitado del Centro de control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad de este Sujeto Obligado, quien mediante similar No. 20600202000000L/C5/12826/2022 solicitó la clasificación de la información, por lo que mediante Acuerdo SS/CT/EXT/X/005/2022 celebrado en la Décima Sesión Extraordinaria el Comité de Transparencia (…) aprobó por unanimidad de votos el documento que contiene los datos de almacenamiento del GPS instalado en la patrulla referida en la solicitud de información 00107/SSEM/IP/2022, del 30 de enero al 07 de febrero de 2022 (…)”* (Sic)

1. De lo anterior se colige que el **SUJETO OBLIGADO** aprovechó el momento procesal identificado como *Etapa de Instrucción* del recurso de revisión para **revocar** su respuesta inicial e informar sobre las actividades de la patrulla ME568A3, registradas durante el periodo comprendido del treinta (30) de enero al siete (07) de febrero de dos mil veintidós.
2. Por otro lado, en lo que corresponde a la información relacionada con los *datos que se guardan en la base de datos del GPS de la patrulla*, el **SUJETO OBLIGADO** entregó el Acta de la Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, celebrada el seis (06) de mayo de dos mil veintidós, así como el Acuerdo SS/CT/EXT/X/005/2022, por el que se determinó clasificar la información de mérito por un periodo de cinco años.
3. Luego entonces, toda vez que el **SUJETO OBLIGADO** asumió contar con la información -tan es así que presentó un listado con las actividades registradas del vehículo de la policía estatal con nomenclatura ME568A3- se considera idóneo obviar el análisis de competencia de la Secretaría de Seguridad para poseer, generar o administrar la información; lo anterior, en virtud de que el estudio de competencia radica en demostrar que el **SUJETO OBLIGADO** cuenta con facultades, competencias y/o funciones específicas que le constriñen a contar con documentos específicos, empero, en el presente asunto la competencia no es motivo de duda, pues –se insiste- el **SUJETO OBLIGADO** no sólo reconoció contar con la información requerida, sino que por un lado, entregó un registro de actividades y, por otro, clasificó los datos de almacenamiento del GPS instalado en la patrulla.
4. Así las cosas, se procederá a analizar el ejercicio de clasificación realizado por el **SUJETO OBLIGADO**, a fin de establecer si, con su informe justificado, se colmó el derecho de acceso a la información ejercido por el particular o, si por el contrario, procede el ordenar la entrega de información.

**III. Del derecho de acceso a la información pública.**

1. Previo a analizar la procedencia de clasificación de la información realizada por el **SUJETO OBLIGADO**, debemos establecer los alcances de la información pública; por ende, se considera importante citar el criterio de interpretación en el orden administrativo número 0002-11, emitido por Acuerdo del Pleno de este Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno” el diecinueve de octubre de dos mil once, cuyo rubro y texto dispone:

***CRITERIO 0002-11***

***INFORMACIÓN PÚBLICA, CONCEPTO DE, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. INTERPRETACIÓN TEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN V, XV, Y XVI, 3, 4,11 Y 41.*** *“De conformidad con los artículos antes referidos, el derecho de acceso a la información pública, se define en cuanto a su alcance y resultado material, el acceso a los archivos, registros y documentos públicos, administrados, generados o en posesión de los órganos u organismos públicos, en virtud del ejercicio de sus funciones de derecho público, sin importar su fuente, soporte o fecha de elaboración.*

*En consecuencia el acceso a la información se refiere a que se cumplan cualquiera de los siguientes tres supuestos:*

*Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea generada por los Sujetos Obligados;*

*Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea administrada por los Sujetos Obligados, y*

*Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, se encuentre en posesión de los Sujetos Obligados.”*

1. El derecho de acceso a la información encuentra su materia elemental en los documentos, y la Ley de Transparencia local nos brinda el siguiente concepto, para darnos un mejor panorama:

***“XI. Documento:*** *Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios****,*** *correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien,* ***cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados****, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;”*

(Énfasis añadido)

1. Es así que, todos los actos de autoridad que realicen los Sujetos Obligados deben estar documentados y, bajo el más alto estándar de transparencia deberán poner toda la información que se encuentre en su posesión, a disposición de los particulares que la soliciten.
2. Así las cosas, conviene reiterar que artículo 6°, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 5, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, guardan una estrecha relación, puesto que los ordenamientos citados concurren refiriendo que **los Sujetos Obligados deberán documentar todo acto que se derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones,** considerando desde su origen la eventual publicidad y reutilización de la información que generen, posean o administren.
3. Además, debemos tomar en cuenta los artículos 4 y 12, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, los cuales establecen lo siguiente:

***Artículo 4.*** *El derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico.*

*Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.*

*Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes.*

***Artículo 12.*** *Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.*

*Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre.* ***La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.***

1. Es así que, por un lado se tiene la obligación de documentar todos los actos que se lleven a cabo en el ejercicio de sus funciones, atribuciones y competencias, mientras que por otro, se ven impuestos por la obligación de hacer pública toda aquella información que se encuentre en su posesión en estricto apego a los principios de eficacia[[12]](#footnote-13) y máxima publicidad, sobre éste último se debe poner mayor énfasis, puesto que establece que toda la información en posesión de los Sujetos Obligados será pública, completa, oportuna y accesible, lo que permite que la ciudadanía tenga un amplio acceso sobre lo que es el actuar de las autoridades.
2. Robustece lo anterior la Tesis aislada identificada con la clave I.4º.A.40 A del Cuarto Tribunal colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta en el libro XVIII, Marzo 2013, Página 1899:

***ACCESO A LA INFORMACIÓN. IMPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD EN EL DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO.*** *Del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el Estado Mexicano está constreñido a publicitar sus actos, pues se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información que obra en poder de la autoridad, que como lo ha expuesto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 54/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página 743, de rubro: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL.", contiene una doble dimensión: individual y social. En su primer aspecto, cumple con la función de maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones, mientras que en el segundo, brinda un derecho colectivo o social que tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como un mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en el actuar de la administración, conducente y necesaria para la rendición de cuentas. Por ello, el principio de máxima publicidad incorporado en el texto constitucional, implica para cualquier autoridad, realizar un manejo de la información bajo la premisa inicial que toda ella es pública y sólo por excepción, en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada, esto es, considerarla con una calidad diversa.*

1. Como se ha señalado, los Sujetos Obligados deberán proporcionar toda la información que se encuentre en su posesión bajo los estándares más altos de transparencia **y máxima publicidad**.
2. Por lo anterior, es de referir que,la **Secretaría de Seguridad**, al ser un Sujeto Obligado comprendido por la Legislación Local en materia de Transparencia, se encuentra obligado a hacer pública toda aquella información que genere, administre o posea.

**IV. De la reserva de la información realizada por el SUJETO OBLIGADO.**

1. Ahora bien, el artículo 122 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, establece que la **clasificación** es el proceso mediante el cual el **SUJETO OBLIGADO** determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad contenidos en los artículos 140 o 143 de la Ley de mérito.
2. Aunado a lo anterior, la Ley de la materia establece que la clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que[[13]](#footnote-14):
	1. Se reciba una solicitud de acceso a la información;
	2. Se determine mediante resolución de autoridad competente; o
	3. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley.
3. Por su parte, el tercer párrafo del artículo 122 de la Ley de mérito establece que **los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información**.
4. En ese tenor, conviene señalar que **en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación**, **el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión**; y, para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el Sujeto Obligado deberá, en todo momento, aplicar una **prueba de daño[[14]](#footnote-15)**.
5. Cabe destacar que, en la aplicación de la prueba de daño, el **SUJETO OBLIGADO** deberá precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, justificando que[[15]](#footnote-16):
	1. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable del perjuicio significativo al interés público o a la seguridad pública;
	2. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda; y
	3. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.
6. Por su parte, el Lineamiento Trigésimo Tercero, fracción V, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, precisa que para motivar la clasificación también se deben acreditar las circunstancias de **tiempo**, **modo** y **lugar**.
7. Consecuencia de lo anterior, los Sujetos Obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera parcial o total de acuerdo al contenido de la información del documento y deberá estar acorde con la actualización de los supuestos definidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, como información clasificada[[16]](#footnote-17).
8. Al respecto, las disposiciones constitucionales y legales en la materia establecen los dos supuestos generales para clasificar la información: por reserva y por confidencialidad.
9. Por cuanto hace a la reserva de la información, el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, establece que el acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando por razones de interés público, ésta sea clasificada como **reservada**, conforme a los criterios siguientes:

*“****I.*** *Comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;*

***II.*** *Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales;*

***III.*** *Se entregue a la Entidad expresamente con ese carácter o el de confidencialidad por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional;*

***IV.*** *Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física;*

***V.*** *Aquella cuya divulgación obstruya o pueda causar un serio perjuicio a:*

***1.*** *Las actividades de fiscalización, verificación, inspección, comprobación y auditoría sobre el cumplimiento de las Leyes; o*

***2.*** *La recaudación de las contribuciones.*

***VI.*** *Pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos, altere el proceso de investigación de las carpetas de investigación, afecte o vulnere la conducción o los derechos del debido proceso en los procedimientos judiciales o administrativos, incluidos los de quejas, denuncias, inconformidades, responsabilidades administrativas y resarcitorias en tanto no hayan quedado firmes o afecte la administración de justicia o la seguridad de un denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;*

***VII.*** *La que contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;*

***VIII.*** *Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan quedado firmes;*

***IX.*** *Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la Ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público;*

***X.*** *El daño que pueda producirse con la publicación de la información sea mayor que el interés público de conocer la información de referencia, siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes;*

*Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización, siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes; y*

***XI.*** *Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.”*

1. Mientras que el artículo 143 de la Ley de mérito reconoce que se considerará a información **confidencial**, la clasificada como tal, de manera permanente, por su naturaleza, cuando:

*“****I.*** *Se refiera a la información privada y los datos personales concernientes a una persona física o jurídico colectiva identificada o identificable;*

***II.*** *Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos; y*

***III.*** *La que presenten los particulares a los sujetos obligados, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.”*

1. Así las cosas, los Sujetos Obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia, sin ampliar las excepciones o supuestos de **reserva** o **confidencialidad** previstos en la Ley General y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, aduciendo analogía o mayoría de razón[[17]](#footnote-18).
2. Una vez establecido lo anterior, y como ha sido reiterado a lo largo del presente estudio, se advierte que el **SUJETO OBLIGADO** presentó el Acta de la Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, de seis (06) de mayo de dos mil veintidós, a través del cual, se emitió el Acuerdo SS/CT/EXT/X/005/2022, por el que se aprobó la reserva de la información requerida, en razón de lo siguiente:

*“(…) se somete a consideración del Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad, la probable clasificación como información Reservada por un término de cinco años, el documento que contiene los datos de almacenamiento del GPS instalado en la patrulla referida en la solicitud 00107/SSEM/IP/2022, del 30 de enero al 07 de febrero de 2022, a partir de la argumentación y fundamentación siguiente:*

*(…)*

*(…) la valoración atribuida como interés social a los fines que persigue la información pública, y que la Secretaría de Seguridad debe garantizar, implica un compromiso de orden prioritario, toda vez que el difundir alguna información puede poner en riesgo la vida, seguridad o la salud de cualquier persona en virtud de que al darse a conocer información sensible a los fines de la seguridad pública, se menoscaba o lesiona la capacidad de respuesta que tienen las autoridades en materia de seguridad pública, y por ende la del Estado, al poner en desventaja la realización de acciones, operativos y programas de vigilancia, seguridad de las personas, así como la de los servidores públicos que realizan estas tareas, lo que colocaría en una situación de riesgo las funciones destinadas a proteger la integridad, seguridad y patrimonio de las personas y del Estado, resultando necesario que prevalezca su reserva aún y cuando se afecten intereses particulares.*

*Por su parte, el Articulo 6, Apenado A, fracción I de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, asi como los artículos 4 y 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establecen como causa de reserva de información, aquella que comprometa la seguridad nacional, mientras que el Articulo 140 Fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de México y Municipios, adecúa esta clasificación cuando se comprmeta la seguridad pública en el ámbito estatal.*

*AI respecto, el primer párrafo del numeral 2 de la Ley de Seguridad del Estado de México, refiere que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas, Municipios y alcaldias de la Ciudad de México que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, asi como la investigación y /a persecución de los delitos, la reinserción socia/ del individuo y la sanción de las infracciones administrativas, en las competencias respectivas.*

*No obstante, cabe señalar que en las actuales condiciones sociales en que se encuentra el país, existen diversas zonas metropolitanas con un alto nivel de delincuencia y violencia. Por lo que las Entidades federativas implementan diversas acciones para tutelar la seguridad y en su caso una pronta reacción de las unidades policiacas. Acciones entre las que se encuentra la instalación de GPS en las patrullas, lo que permite ubicar en tiempo real el trayecto y ubicación de los vehículos, de modo que al recibir una Ilamada de auxilio en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), puedan identificar la unidad más cercana y enviarla para brindar la ayuda requerida.*

*Ahora bien, el hacer públicos los datos de almacenamiento de los GPS, permitiría que grupos delictivos, puedan en primer lugar modificar las zonas en las cuales cometen hechos delictivos, o bien conocer los recorridos exactos de las unidades vehiculares y con esto planear sus estrategias, ocasionando un perjuicio, principalmente en la sociedad respecto a garantizar la seguridad pública para que en caso de algún hecho delictivo, se pueda actuar y poder detener delincuentes, pero también coloca en riesgo a los elementos operativos que conducen la unidades.*

*Es por ello que, la Secretaría de Seguridad a través del (C5) debe preservar el manejo adecuado de las Tecnologías de la Información y Comunicación que utiliza para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, orientados a coadyuvar en los procesos de prevención e investigación de los fenómenos delictivos que ocurren en el Estado de México, a través de las tareas de prevención y reacción que realiza, por medio del uso de la infraestructura tecnológica.*

*Por todo lo anterior, el C5 solicita al Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad, analizar la pertinencia de clasificar com oinformación reservada por un periodo de cinco años, el documento que contiene los* ***datos de almacenamiento del GPS instalado en la patrulla referida en la solicitud 00107/SSEM/IP/2022, del 30 de enero al 07 de febrero de 2022,*** *con fundamento de los artículos 113, fracciones I, V y VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 140, fracciones I, IV y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 81, fracciones I y II de la Ley de Seguridad del Estado de México; 34 y 40 de la Ley de Regula el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación para la Seguridad Pública del Estado de México, así como los numerales Séptimo Fracción I, Décimo octavo, Vigésimo tercero y Vigésimo sexto de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas (…)*

*(…)*

*En ese tenor de ideas, atendiendo el contendio del Artículo 129 Fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, la Prueba de Daño del tema que nos ocupa se materializa a través de los riesgos siguientes:*

* ***Real****, puesto que dar a conocer* ***los datos de almacenamiento del GPS instalado en la patrulla referida en la solicitud 00107/SSEM/IP/2022, del 30 de enero al 07 de febrero de 2022****, revelaría la ubicación geográfica exacta de los recorridos que realizan en el día a día a través de operativos, lo cual allanaría la realización de actos contrarios a derecho por integrantes de grupos delincuenciales que a través del tiempo han perfeccionado su actuar en contra de la seguridad de los ciudadanos y que al amparo del ejercicio del derecho de acceso a al información, pretenden conocer información sensible de las instituciones responsabiles de la seguridad pública, además de existir la posibilidad de atendar contra la vida e integridad física de los elementos, en detrimiento de los mecanismos, estrategias y acciones que emprende la Secretaría de Seguridad para el cumplimiento de sus objetivos.*
* ***Demostrable****, el revelar información específica respecto de* ***los datos de almacenamiento del GPS instalado en la patrulla referida en la solicitud 00107/SSEM/IP/2022, del 30 de enero al 07 de febrero de 2022****, implica conocer la ubicación geográfica exacta de la unidad vehicular, que está destinada para la preservación del orden y la paz públicos, con el objeto de eficientar la prevención y el combate al fenómeno delictivo, por lo que su divulgación colocaría al Estado en uan situación de vulnerabilidad frente a terceros, disminuyendo la capacidad de reacción institucional e impactando además en otras instancias relacionadas con la seguridad pública, al entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional, en menoscabo de las tácticas, operativos, dispositivos y estrategias implementadas en contra del delito.*
* ***Identificable****, dado que la divulgación de información específica relacionada con* ***los datos de almacenamiento del GPS instalado en la patrulla referida en la solicitud 00107/SSEM/IP/2022, del 30 de enero al 07 de febrero de 2022****, puede ocasionar graves daños a la sociedad y a la Secretaría de Seguridad, pues se revelaría información sobre localización de la infraestructura tecnológica con la que cuenta este Sujeto Obligado, colocando a la Secretaría en una situación de desventaja por parte de personas o grupos delictivos interesados en disminuir la capacidad de reaccón institucional.*

*De lo anterior, y con fiundamento en el Artículo 129 Fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, puede observarse que,* ***el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda****, ya que dar a conocer cualquier información relativa a* ***los datos de almacenamiento del GPS instalado en la patrulla referida en la solicitud 00107/SSEM/IP/2022, del 30 de enero al 07 de febrero de 2022****, atentaría contra el objetivo principal de este Sujeto Obligado, que es el de mejorar la reacción entre elementos de seguridad y operadores de emergencias ensituaciones de crisis con un tiempo de respuesta eficiente y en consecuencia se estaría mermando la capacidad de la institución para prevenir y/o impedir delitos.*

*Por otra parte, y con fundamento en el* ***Artículo 129 Fracción III*** *de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios,* ***la limitación es proporcional y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, en tanto que se justifica negar su divulgación por el riesgo a vulnerar el interés público que existe****. Por lo tanto, dicha restricción es la idónea en virtud de que constituye la única medida posible para proteger en el caso que nos ocupa* ***los datos de almacenamiento del GPS instalado en la patrulla referida en la solicitud 00107/SSEM/IP/2022, del 30 de enero al 07 de febrero de 2022****, pues evitaría graves deterioros a la infraestructura tecnologías, así como las estrategias que se tiene para prevenir el delito.*

*(…)”* (Sic)

1. De las líneas transcritas *supra* podemos recuperar los siguientes elementos:
	1. Que el Comité de Transparencia consideró que la publicación de la información relacionada con los datos de almacenamiento del GPS instalado en la patrulla con nomenclatura ME568A3 puede poner en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona, pues se menoscabaría la capacidad de respuesta que tienen las autoridades, en materia de seguridad pública, al poner en desventaja la realización de acciones, operativos y programas de vigilancia.
	2. Que el hacer público los datos de almacenamiento del GPS instalado en la patrulla con nomenclatura ME568A3 permitiría que grupos delictivos modifiquen las zonas en las que cometen hechos delictivos, o bien, conocer los recorridos exactos de las unidades vehiculares y, con ello, planear sus estrategias, ocasionando un perjuicio a la sociedad y poniendo en riesgo a los elementos operativos que conducen las unidades.
	3. Que existe un riesgo real pues, el dar a conocer los datos de almacenamiento del GPS instalado en la patrulla con nomenclatura ME568A3, revelaría la ubicación geográfica exacta de los recorridos diarios de la unidad.
	4. Que grupos delincuenciales, a través del tiempo, han perfeccionado su actuar contra la seguridad de los ciudadanos y, que al amparo del ejercicio del derecho de acceso a la información, pretenden conocer información sensible de las instituciones responsables de la seguridad pública.
	5. Que el riesgo es demostrable pues el dar a conocer los datos de almacenamiento del GPS instalado en la patrulla con nomenclatura ME568A3, implica conocer la ubicación geográfica exacta de la unidad destinada para la preservación del orden y la paz públicos, lo cual colocaría al Estado en una situación de vulnerabilidad frente a terceros, disminuyendo su capacidad de reacción y entorpeciendo los sistemas de coordinación interinstitucional.
	6. Que el riesgo es identificable ya que el divulgar los datos de almacenamiento del GPS instalado en la patrulla con nomenclatura ME568A3, ocasionaría graves daños a la sociedad, pues se revelaría información sobre localización de la infraestructura tecnológica con la que cuenta el **SUJETO OBLIGADO** para combatir los delitos.
2. Aunado a lo anterior, se advierte que el **SUJETO OBLIGADO** fundó su pretensión de reservar la información solicitada con base en las fracciones I, IV y VI del artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, mismas que, como se ha referido anteriormente, consisten en:

*“****Artículo 140.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando por razones de interés público, ésta sea clasificada como reservada, conforme a los criterios siguientes:*

***I.*** *Comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;*

*(…)*

***IV.*** *Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física;*

*(…)*

***VI.*** *Pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos, altere el proceso de investigación de las carpetas de investigación, afecte o vulnere la conducción o los derechos del debido proceso en los procedimientos judiciales o administrativos, incluidos los de quejas, denuncias, inconformidades, responsabilidades administrativas y resarcitorias en tanto no hayan quedado firmes o afecte la administración de justicia o la seguridad de un denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;*

*(…)”*

1. Correlativo a lo anterior, el **SUJETO OBLIGADO** pretendió aplicar las causales de reserva establecidas en el artículo 113, fracciones I, V y VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual señala:

*“****Artículo 113.*** *Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:*

***I.*** *Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;*

*(…)*

***V.*** *Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;*

*(…)*

***VII.*** *Obstruya la prevención o persecución de los delitos;*

*(…)”*

1. Dicho lo resulta elemental referir que las causales de reserva contenidas en el artículo 140 de la Ley de Transparencia Estatal armonizan las causales de reserva establecidas en la Ley General. En ese sentido, el Lineamiento Primero de los *Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de la Versiones Públicas*, establece que éstos tienen por objeto establecer los criterios con base en los cuales los sujetos obligados clasificarán como reservada o confidencial la información que posean, desclasificarán y generarán, en su caso, versiones públicas de expedientes o documentos que contengan partes o secciones clasificadas. Asimismo, se establece que el cuerpo normativo de referencia será de observancia **obligatoria** para todos los Sujetos Obligados, los cuales considerarán a **cualquier autoridad**, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato **que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos** federal, de las entidades federativas y **municipal[[18]](#footnote-19)**.
2. Por cuanto hace a la causal de reserva establecida en la fracción I del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Lineamientos establecen de manera precisa los elementos que se deberán acreditar para demostrar, de manera fundada y motivada, que la información pública solicitada acredita la necesidad de limitar su acceso temporalmente:

*“****Décimo séptimo.*** *De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencialice un riesgo o amenaza a la seguridad nacional cuando:*

***I.*** *Se quebrante la unidad de las partes integrantes de la Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;*

***II.*** *Se atente en contra del personal diplomático;*

***III.*** *Se amenace o ponga en riesgo la gobernabilidad democrática porque se impida el derecho a votar o a ser votado, o cuando se obstaculice la celebración de elecciones;*

***IV.*** *Se obstaculicen o bloqueen las actividades de inteligencia o contrainteligencia y cuando se revelen normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipo que sean útiles para la generación de inteligencia para la seguridad nacional;*

***V.*** *Se vulneren las acciones para evitar la interferencia extranjera en los asuntos nacionales;*

***VI.*** *Se ponga en peligro la coordinación interinstitucional en materia de seguridad nacional;*

***VII.*** *Se puedan menoscabar, obstaculizar o dificultar las estrategias o acciones para combatir la delincuencia organizada, la comisión de los delitos contra la seguridad de la nación, entendiéndose estos últimos como traición a la patria, espionaje, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje, conspiración, el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva;*

***VIII.*** *Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de emergencia, vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional;*

***IX.*** *Se obstaculicen o bloqueen acciones tendientes a prevenir o combatir epidemias o enfermedades exóticas en el país;*

***X.*** *Se difundan las actas o documentos generados en las sesiones del Consejo de Seguridad Nacional y actualice alguna de las amenazas previstas en la Ley de Seguridad Nacional, o que*

***XI.*** *Se entreguen los datos que se obtengan de las actividades autorizadas mediante resolución judicial, así como la información producto de una intervención de comunicaciones privadas autorizadas, conforme a las disposiciones previstas en el Capítulo II del Título III de la Ley de Seguridad Nacional, y constituyan alguna de las amenazas previstas en dicha Ley.*

*Asimismo, podrá considerarse como reservada aquella que revele datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad nacional; sus normas,”*

1. Por su parte, los Lineamientos Vigésimo tercero y Vigésimo sexto, enlistan y reconocen los elementos para acreditar la actualización de reserva de información de conformidad con lo establecido por el artículo 113, fracciones V y VII de la Ley General respectivamente, a saber:

*“****Vigésimo tercero.*** *Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.”*

*“****Vigésimo sexto.*** *De conformidad con el artículo 113, fracción VII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos al obstaculizar las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos.*

*Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio a las actividades de persecución de los delitos, deben de actualizarse los siguientes elementos:*

 ***I.*** *La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite;*

***II.*** *Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación, o el proceso penal, según sea el caso, y*

***III.*** *Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal.”*

1. Dentro del presente asunto, y como fuera demostrado a través de la transcripción del contenido del Acuerdo de Clasificación SS/CT/EXT/X/005/2022, no se advierte que el **SUJETO OBLIGADO** haya atendido ninguno de los criterios de fondo para demostrar que, en el caso específico, se actualizaba alguna de las causales de reserva invocadas por el ente público, pues *grosso modo* **únicamente se limitó a referir que el proporcionar los datos del GPS de la patrulla podría permitir que grupos delictivos modifiquen las zonas en las que cometen hechos delictivos, o bien, conocer los recorridos exactos de las unidades vehiculares y, con ello, planear sus estrategias;** sin jamás establecer una teoría del caso en concreto o de la información o documentación específica que actualizara alguna de las causales de reserva enunciadas del artículo 140 de la Ley de la materia, dejando al particular en un total estado de **incertidumbre**.
2. En el mismo sentido, ninguno de los planteamientos expuestos en la prueba de daño es justificado con antecedentes, hechos o circunstancias de **modo**, **tiempo** o **lugar**; sino que simplemente se asientan aseveraciones meramente **subjetivas** al no encontrarse fundadas o motivadas.
3. Consecuencia de lo anterior, este Organismo Garante concluye que el **SUJETO OBLIGADO** omitió enteramente realizar la prueba de daño que mandata la Ley General y Local para determinar si ha lugar la reserva de la información. Por lo anterior, este Organismo Garante estima necesario referir que el Lineamiento Trigésimo Tercero de los *Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de la Versiones Públicas*, establece lo siguiente:

*“****Trigésimo tercero.****Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 104 de la Ley General, los sujetos obligados atenderán lo siguiente:*

***I.****Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada;*

***II.****Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este último rebasa el interés público protegido por la reserva;*

***III.****Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado de que se trate;*

***IV.****Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;*

***V.****En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar del daño, y*

***VI.*** *Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información.”*

1. Por lo anterior, este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios hace un llamado al **SUJETO OBLIGADO** para que, en adelante, elabore sus ejercicios de clasificación de la información, por reserva o confidencialidad, de manera fundada y motivada, apegándose a los criterios establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables.
2. No se omite mencionar que la esencia de la justificación del **SUJETO OBLIGADO** de restringir el acceso a los datos contenidos en el GPS de la patrulla con nomenclatura ME568A3 se advierten genuinos, pues el dar a conocer la localización exacta del vehículo implica que se dé a conocer la ruta o recorrido que realiza en materia de vigilancia, combate y prevención del delito.
3. Por lo anterior, el **SUJETO OBLIGADO** deberá entregar el Acuerdo de su Comité de Transparencia en el que, de manera fundada y motivada, justifique las razones por las que no es posible dar a conocer los datos obtenidos por el sistema de posicionamiento de la unidad policial, siguiendo estrictamente las disposiciones contenidas en la Ley General y Ley Estatal de Transparencia, así como en los *Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de la Versiones Públicas.*

## **QUINTO. Decisión.**

1. Luego de analizar las constancias que obran dentro del expediente digital formado en el SAIMEX, se estableció que el **SUJETO OBLIGADO** no había fundado ni motivado adecuadamente la reserva de la información solicitada; por ello, una vez analizada la naturaleza de los datos recabados por el GPS de la patrulla estatal con nomenclatura ME568A3, se determinó procedente su reserva; empero, para ello, el **SUJETO OBLIGADO** tendría que emitir un nuevo acuerdo de clasificación debidamente fundado y motivado.
2. Por lo tanto, en consecuencia y en mérito de lo expuesto en líneas anteriores, resultan fundadas las razones o motivos de inconformidad hechos valer por el **RECURRENTE** dentro del recurso de revisión **06708/INFOEM/IP/RR/2022**; por ello, y con fundamento en la fracción III del numeral 186 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se **REVOCA** la respuesta a la solicitud de información número **00107/SSEM/IP/2022**.
3. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este **ÓRGANO GARANTE** emite los siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------------

# **R E S O L U T I V O S**

**PRIMERO.** Resultan fundadas lasrazones o motivos de inconformidad hechos valer en el recurso de revisión **06708/INFOEM/IP/RR/2022,** en términos del **considerando** **CUARTO** de la presente resolución.

**SEGUNDO.** Se **REVOCA** la respuesta emitida por la **Secretaría de Seguridad** a la solicitud **00107/SSEM/IP/2022** y se **ORDENA** entregar, vía Sistema de Acceso a la Información Pública Mexiquense (SAIMEX), los documentos donde conste la siguiente información:

1. **Acuerdo del Comité de Transparencia, en el que se justifiquen, de manera fundada y motivada, las razones y motivos por los que deben clasificarse los datos recabados por el GPS de la unidad policial con nomenclatura ME568A3, por el periodo comprendido del treinta (30) de enero al siete (07) de febrero de dos mil veintidós.**

**TERCERO.** **Notifíquese** a la Titular de la Unidad de Transparencia del **SUJETO OBLIGADO**, vía SAIMEX, la presente resolución, para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios **dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles,** e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente, y se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**CUARTO.** De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el **SUJETO OBLIGADO,** de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**QUINTO.** Notifíquese al **RECURRENTE** la presente resolución vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).

**SEXTO.** Se hace del conocimiento del **RECURRENTE** que, de conformidad con

lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y en lo dispuesto en los artículo 159 y 160 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en caso de que considere que la resolución le causa algún perjuicio podrá impugnarla vía recurso de inconformidad ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; o bien, vía juicio de amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS; MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA; SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ; LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA emitiendo voto particular Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA; EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

1. “*El artículo 17 de la Constitución consagra la garantía denominada derecho a la jurisdicción que consiste, conforme al texto literal del precepto, en que "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" lo que significa, por regla general, que un funcionario judicial actúa indebidamente cuando incurre en dilaciones que lo llevan a vulnerar esos dispositivos al no acordar las promociones de las partes o emitir las resoluciones dentro de los términos específicos que para cada situación señalan las normas procesales aplicables. De ello se sigue que si se formula una queja administrativa con motivo de esas irregularidades y el funcionario admite que incurrió en ellas o las mismas se encuentran probadas, en principio, debe considerarse fundada la queja e imponer las correcciones disciplinarias que correspondan o adoptar medidas que se juzguen convenientes. Sin embargo, al examinar cada caso se debe considerar que el legislador al fijar términos procesales en las leyes respectivas no pudo atender a la variada gama de casos que se someten a los tribunales, tanto por la índole de las cuestiones jurídicas que se controvierten como por la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente y la extensión de los escritos aportados y pruebas desahogadas. Por la naturaleza del problema resulta lógico inferir que el legislador, al hacer la determinación a que se alude tomó en cuenta, por una parte, el tiempo que previsiblemente, considerando la capacidad y diligencia medias de un juzgador y de su personal profesional y administrativo de apoyo, se requiere para acordar o resolver la generalidad de los asuntos que ingresan a los órganos jurisdiccionales y, por otra, a que este ingreso sea en número proporcionado a la potencialidad de trabajo del juzgado o tribunal que corresponda. Por todo ello cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que o bien se presentaron atenuantes o bien, excluyentes de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario contra el que se formuló la queja administrativa y resolverla en consecuencia.*” [↑](#footnote-ref-2)
2. Consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351. [↑](#footnote-ref-3)
3. Consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350. [↑](#footnote-ref-4)
4. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 13. [↑](#footnote-ref-5)
5. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo sexto, sección A, fracción I. [↑](#footnote-ref-6)
6. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C. No. 151. Párr. 86. [↑](#footnote-ref-7)
7. Ibídem. Parr. 87. [↑](#footnote-ref-8)
8. Artículo 50, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. [↑](#footnote-ref-9)
9. Artículo 51, Ídem. [↑](#footnote-ref-10)
10. Artículo 58, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. [↑](#footnote-ref-11)
11. Artículo 59, Ídem. [↑](#footnote-ref-12)
12. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. Artículo 9. …

II. Eficacia: Obligación del Instituto para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información;

… [↑](#footnote-ref-13)
13. Artículo 132, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. [↑](#footnote-ref-14)
14. Artículo 128, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. [↑](#footnote-ref-15)
15. Artículo 129, Ídem. [↑](#footnote-ref-16)
16. Artículo 134, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. [↑](#footnote-ref-17)
17. Artículo 130, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. [↑](#footnote-ref-18)
18. Lineamiento Segundo, fracción XVI, Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de la Versiones Públicas [↑](#footnote-ref-19)